

INFORME AL X PLENO DEL COMITÉ CENTRAL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

Compañeras y compañeros, realizamos esta reunión plenaria del Comité Central a solo seis días de haber concluido una intensa y decisiva batalla político-electoral, tanto presidencial como parlamentaria, cuyos resultados marcarán el rumbo del país, al menos, durante los próximos cuatro años.

Saludamos con profundo reconocimiento y gratitud la disposición, compromiso y consecuencia de la compañera Jeannette Jara al asumir la responsabilidad histórica de representar a las fuerzas de la izquierda y la centroizquierda en la elección presidencial de Chile. Su decisión expresó convicción política, vocación democrática y una genuina voluntad de poner los intereses del pueblo por sobre cualquier consideración personal, en un escenario complejo y desafiante para el país.

Extendemos este saludo a todas y todos los compañeros y compañeras que asumieron candidaturas en este proceso electoral, quienes con esfuerzo, generosidad y compromiso recorrieron territorios, enfrentaron debates y sostuvieron propuestas al servicio de las mayorías. Su trabajo fue fundamental para levantar ideas, defender derechos y mantener viva la esperanza de transformación social, aun en condiciones adversas.

Corresponde ahora iniciar un debate profundo, riguroso y colectivo que nos permita extraer todas las conclusiones y enseñanzas necesarias, con la perspectiva de enriquecer y actualizar la política aprobada en nuestro XXVII Congreso Nacional. Este pleno debe dar inicio formal al proceso de evaluación y, al mismo tiempo, orientar el intercambio político con las distintas estructuras del Partido, de modo que en cada territorio —a partir de sus propias realidades y datos concretos— se logre identificar no solo los resultados cuantitativos, sino también los elementos cualitativos que explican el comportamiento político y social de nuestro pueblo. Ese conocimiento situado de la realidad es una responsabilidad insustituible de los distintos órganos de dirección.

Fue necesario programar este pleno para hoy, considerando que nos encontramos ya hacia el cierre del año político. Postergar excesivamente este análisis podría abrir espacio a la dispersión, la especulación individual o a lecturas parciales que no contribuyen a una comprensión colectiva y disciplinada del momento que vivimos.

En el plano presidencial hemos sufrido una dura derrota. No solo por los porcentajes obtenidos por la candidatura del campo democrático y transformador, sino, fundamentalmente, porque ha triunfado una opción de ultraderecha. El resultado representa un hecho político de enorme preocupación: hasta hace no mucho tiempo habría sido impensable que una figura que reivindicó abiertamente la dictadura pudiera alcanzar la Presidencia de la República mediante elecciones democráticas, y más aún bajo un sistema de voto obligatorio, con una participación electoral históricamente alta.

Este resultado no puede ser comprendido únicamente desde la lógica tradicional izquierda–derecha. En la política chilena se ha instalado con fuerza un **clivaje pueblo–élite**, que hoy domina el escenario político y el sentido común de amplios sectores populares. Este eje ha sido capitalizado con eficacia por candidaturas como las de Kast, Kaiser y Parisi, que —desde distintas posiciones ideológicas— han logrado presentarse como expresiones de una supuesta rebeldía contra las élites políticas, económicas y culturales, aun cuando en los hechos representen proyectos profundamente conservadores o funcionales al orden neoliberal.

Este fenómeno interpela directamente a los partidos políticos tradicionales y, en particular, a aquellos que han optado por actuar sin coaliciones amplias, sin anclaje social suficiente o sin una articulación sólida con las demandas populares. La fragmentación del campo popular y democrático, la debilidad de proyectos colectivos y la ausencia de una narrativa común han facilitado que discursos antipolíticos y personalistas ocupen ese vacío, erosionando la confianza en la organización política como herramienta de transformación.

Debemos mirar de frente la realidad, asumir con responsabilidad esta derrota y evitar cualquier autoengaño. Solo desde una evaluación honesta, crítica y autocítica podremos extraer las conclusiones necesarias para fortalecer las luchas democráticas futuras y construir las condiciones políticas y sociales que impidan que la ultraderecha se proyecte más allá de un período, y que permitan reabrir un horizonte de transformaciones profundas al servicio del pueblo de Chile.

Situación internacional

La actualidad y el futuro de nuestro país son inseparables del cuadro dinámico, tenso y profundamente contradictorio que atraviesa al mundo. El capitalismo neoliberal enfrenta hoy una crisis estructural que ya no logra administrar por los mecanismos tradicionales, recurriendo crecientemente al militarismo, a la intervención abierta y a la imposición del pensamiento único para restaurar el conservadurismo, vulnerar el derecho internacional y aplicar sanciones y bloqueos unilaterales como forma de sortear sus propias debilidades.

Esta ofensiva imperial estimula deliberadamente la incertidumbre y el desamparo social, buscando resignar a los pueblos a aceptar salidas autoritarias. La catástrofe social, ambiental y económica provocada por el neoliberalismo se escapa del control de sus propios gestores, quienes recurren a la fuerza como último recurso. Si bien estas fuerzas logran triunfos electorales —como ocurrió recientemente en nuestro país— ello está inseparablemente ligado a una ofensiva política, mediática y cultural orientada a bloquear la emergencia de alternativas populares que cuestionen el modelo dominante.

En este escenario, avanzar hacia una nueva sociedad exige construir una alternativa arraigada en nuestra identidad latinoamericana, basada en pensamiento crítico propio y no en la copia mecánica de experiencias ajenas a nuestra realidad concreta.

En este marco global, Chile adquiere una relevancia estratégica creciente. Nuestro país es el mayor productor mundial de cobre, posee las mayores reservas de litio y cuenta con un enorme potencial para el desarrollo del hidrógeno verde. Estos recursos, claves para la transición energética, el desarrollo tecnológico y las industrias del futuro, sitúan a Chile en el centro de los intereses de las grandes potencias.

Paralelamente, la creciente presencia de China como principal socio comercial de Chile y de gran parte de la región, así como el surgimiento de nuevos polos de desarrollo fuera de la hegemonía estadounidense, contrastan con la crisis interna de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Mientras se debilita la influencia norteamericana en Asia y África, Washington reorienta su estrategia hacia un mayor control de América Latina, reivindicando de facto la doctrina Monroe y reforzando su política de intervención regional.

Este reposicionamiento se expresa en acciones como el despliegue naval frente a Venezuela, el bloqueo económico, los ataques extrajudiciales y el intento de apropiación de recursos energéticos bajo el pretexto del combate al narcotráfico.

Vivimos, por tanto, un momento histórico intenso y profundamente contradictorio. La hegemonía del capital financiero especulativo, prevista por Marx y profundizada tras la caída de los socialismos reales, comienza a debilitarse en sus pilares fundamentales: el imperialismo norteamericano, la OTAN y las corporaciones transnacionales. Frente a la crisis ambiental y civilizatoria, estos poderes responden con mayor violencia, negando la paz, el diálogo y el derecho internacional. Persisten el genocidio contra el pueblo palestino y las agresiones en Medio Oriente, África y América Latina, mientras los discursos tradicionales sobre democracia y libertad han perdido toda credibilidad.

En este contexto internacional y regional, resulta indispensable situar el análisis del resultado electoral presidencial en Chile. El auge de proyectos de ultraderecha en el mundo y en nuestro continente constituye un marco insoslayable. Los avances de fuerzas como el gobierno de Giorgia Meloni en Italia, el crecimiento de la ultraderecha en Alemania, la arremetida de VOX en España, la proscripción del Partido Comunista en Polonia o el caso de Hungría, expresan un giro político cada vez más visible. Bajo consignas de seguridad, control migratorio y combate al crimen organizado, se expanden proyectos conservadores en lo valórico y crecientemente desafectos de la democracia, desplazando el eje del debate desde la superación de las desigualdades hacia el miedo y el control social.

En América, esta tendencia se manifiesta en experiencias como Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador, la reelección de Trump en Estados Unidos y el gobierno de Javier Milei en Argentina. En todos estos casos, el malestar social generado por democracias debilitadas y modelos económicos excluyentes es capitalizado por proyectos autoritarios que prometen orden, castigo y soluciones rápidas, aun a costa de derechos fundamentales.

Chile no ha estado ajeno a esta dinámica. La alta concentración de los medios de comunicación en manos de sectores vinculados a la derecha ha contribuido a instalar un clima

de alarma permanente, funcional a los discursos de la ultraderecha. Durante la segunda vuelta presidencial, episodios como la supuesta “salida masiva” de migrantes por la frontera peruana —producto de una campaña de desinformación— ejemplifican el uso del miedo y la manipulación mediática como herramientas de disputa política.

En síntesis, la elección presidencial no puede ser leída de manera aislada ni reducida exclusivamente a factores internos de campaña. Se inscribe en un contexto global y regional marcado por el avance de la ultraderecha, la crisis del neoliberalismo, el desplazamiento del debate político hacia la seguridad y el miedo, y el uso intensivo de dispositivos mediáticos y culturales para moldear la opinión pública. Situar la elección en este marco histórico y político es condición indispensable para comprender sus resultados y para extraer lecciones estratégicas de cara al período que se abre.

El proceso histórico

La comprensión del resultado electoral presidencial de 2025 exige situarlo en un proceso histórico de larga duración, marcado por transformaciones estructurales en la relación entre Estado, política y pueblo. Tras el golpe de Estado de 1973, el Partido Comunista de Chile enfrentó una política sistemática de persecución y exterminio. Pese a su rol decisivo en la lucha contra la dictadura y en impedir la perpetuación del régimen de Pinochet, fue deliberadamente excluido del pacto transicional de comienzos de los años noventa, bajo la presión del imperialismo norteamericano, que condiciona su respaldo a la transición a la marginación del Partido, del movimiento de trabajadores y de las masas populares.

Desde ese período se nos calificó como un partido “peligroso”, acusado de dogmático y antidemocrático. Resulta significativo constatar que, en un momento histórico distinto, resurgen hoy discursos similares desde sectores del sistema político nacional e internacional, orientados a debilitar nuestra presencia y cuestionar nuestra vocación democrática y transformadora. Frente a ese escenario, desde comienzos de los años noventa, bajo la conducción de Gladys Marín, el Partido impulsó tempranamente una política para frenar la derechización del país, combinando lucha social, trabajo territorial y búsqueda de alianzas amplias, sin renunciar a denunciar los riesgos del apoliticismo, el individualismo y la mercantilización de la vida social.

Este esfuerzo permitió romper la exclusión institucional, recuperar presencia parlamentaria desde 2009, construir una base municipal sólida y aportar decisivamente al movimiento sindical, estudiantil, feminista, medioambiental y territorial. Estas acumulaciones sociales y políticas fueron expresión de una crisis estructural del modelo neoliberal que, aunque contenida durante años, estalló con fuerza en octubre de 2019, un proceso que es necesario conocer en profundidad para nuestro trabajo político y social.

A este escenario se sumó un factor estructural decisivo: el retorno del voto obligatorio desde 2022, que incorporó cerca de cinco millones de personas al padrón electoral. Este “votante obligado” se inclinó mayoritariamente por opciones de derecha, con la excepción del rechazo a la segunda propuesta constitucional ultroliberal, donde el llamado al “en contra” logró

sintonizar con un electorado cansado del debate constitucional y profundamente desconfiado de la política institucional.

Este electorado presenta rasgos comunes: capas medias y populares urbanas, endeudadas, temerosas de perder lo alcanzado, exigentes en seguridad, críticas de la burocracia estatal y con una relación pragmática y volátil con la política. En buena medida, el respaldo obtenido por Franco Parisi en la primera vuelta se explica por su capacidad de interpelar este universo social. La despolitización del mundo popular, fenómeno estructural del neoliberalismo posdictadura, ya se había expresado anteriormente en altos niveles de abstención y voto nulo, y ahora se manifiesta de forma distinta bajo el voto obligatorio.

Es en este marco histórico y social que se desarrolló la elección presidencial de 2025, la primera con inscripción automática y voto obligatorio, alcanzando una participación superior al 80% del padrón electoral. Con estos antecedentes, el Partido Comunista definió su estrategia conforme a lo acordado en el Congreso Nacional de enero: construir la más amplia Unidad Social y Política para enfrentar el avance de la ultraderecha y convocar a las mayorías desafectadas de la política.

En coherencia con esta línea, el Partido impulsó una primaria amplia del sector y resolvió, por unanimidad, levantar una candidatura propia. En abril, el Comité Central proclamó a la compañera Jeannette Jara, quien obtuvo un triunfo contundente con el 60% de los votos, alcanzando la mayor votación lograda por un comunista desde el retorno a la democracia. Este resultado abrió un escenario inédito para el Partido, que por primera vez encabezó una candidatura presidencial del conjunto de la coalición.

Este hecho se inscribe en un proceso histórico de superación de la exclusión política posdictadura y en la consolidación de una bancada parlamentaria relevante. Paralelamente, el Partido asumió la responsabilidad de impulsar la unidad de las fuerzas democráticas, promoviendo una lista parlamentaria única —que no logró concretarse— y articulando la lista “Unidad por Chile”, clave para defender posiciones estratégicas, especialmente en el Senado.

El momento que vive Chile no es solo una coyuntura electoral adversa, sino la expresión de una disputa de largo aliento por el sentido de la democracia, el rol del Estado y la relación entre política y pueblo. La derechización actual no responde únicamente a un giro ideológico, sino a una búsqueda desesperada de respuestas frente a problemas reales de subsistencia. Comprender correctamente este ciclo histórico será determinante para reconstruir un horizonte de transformación social y democrática para Chile.

Los desafíos para la política del Partido Comunista

El principal desafío político del Partido Comunista de Chile en el momento histórico actual es impedir que la tendencia de derechización y autoritarismo que hoy se expresa electoralmente se proyecte en el tiempo. En concreto, se trata de evitar que un proyecto político que asume y

profundiza los pilares ideológicos, económicos y culturales que sustentaron la dictadura cívico-militar logre consolidarse como un nuevo régimen de largo plazo.

Este desafío no es solo coyuntural, sino profundamente estratégico y dialéctico. Impedir la proyección de ese proyecto implica, al mismo tiempo, crear en el corto plazo —en el horizonte inmediato de los próximos cuatro años— todas las condiciones políticas, sociales y culturales para articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses. Un pueblo fuerte en los territorios, desde abajo, con unidad social real, con frentes sociales activos, sindicatos, organizaciones gremiales y comunitarias, capaz de expresar esa fuerza también en el plano electoral. No se trata de esperar los ciclos electorales para activar al pueblo, sino de comprender que la disputa electoral es una consecuencia —no la causa— de la acumulación social y política.

Este enfoque remite directamente a la contradicción central que atraviesa nuestra época: la contradicción entre neoliberalismo y democracia.

Desde esa perspectiva, la política del Partido Comunista no puede reducirse a la competencia institucional dentro de los márgenes del neoliberalismo, sino que debe orientarse a disputar ese marco estructural, reconstruyendo sujetos sociales capaces de empujar una democratización real de la sociedad. Por eso, cuando hablamos de interactuar con las masas y con la ciudadanía, ponemos en el centro a la ciudadanía real, aquella que ha votado como ha votado: por Kast, por Parisi, y también por nuestra candidatura, cuya votación tiene un alto significado político en este contexto. No partimos de una lectura moral o ideológica del voto, sino de una comprensión material y social de sus causas.

Existen bases para enfrentar estos desafíos. No actuamos desde cero. El Partido Comunista tiene historia, acumulado político, experiencia territorial y presencia social. Sin embargo, también existen urgencias, y una de las principales es abrir paso a un trabajo de masas sistemático y sostenido, teniendo como eje central a las y los trabajadores.

Quienes hoy representan a la derecha y han alcanzado una representación parlamentaria significativa no solo han contado con grandes recursos económicos y poder mediático; también han realizado un trabajo territorial persistente, desde abajo. Existe un campo de disputa abierto en el espesor de las masas, y ese es un dato central de la realidad que no podemos ignorar.

Las grandes demandas ciudadanas —salud, seguridad, salarios, vivienda, dignidad—, la articulación social territorial y las propuestas construidas en diálogo con movimientos sociales organizados son claves para enfrentar el desafío estratégico que tenemos por delante. En este marco, el Partido Comunista hará todos los esfuerzos necesarios para construir la unidad social y política de las mayorías nacionales, sin exclusiones a priori de ningún sector social o político.

Evaluación de las elecciones parlamentarias

En este año de intensa disputa político-electoral e ideológica, junto a la candidatura presidencial, el Partido Comunista enfrentó la elección parlamentaria de diputados y senadores, en un escenario complejo marcado por tensiones internas del sector y una fuerte ofensiva de la derecha.

Tras los intercambios en el Comité Central y el proceso de negociación con el sector, el Partido presentó inicialmente 23 candidaturas a diputados y 5 al Senado. En un primer momento, ocho partidos acordaron concurrir en una sola lista, sin embargo, dos de ellos se retiraron para conformar un pacto propio, debilitando las proyecciones electorales y poniendo en riesgo la posibilidad de una mayoría parlamentaria. El Partido Comunista sostuvo permanentemente la necesidad de una lista única para enfrentar a la derecha.

Un segundo momento relevante fue la incorporación de la Democracia Cristiana al pacto parlamentario, tras su respaldo a la candidatura presidencial de la compañera Jeannette Jara.

Un tercer factor fue la presión ejercida hacia el Partido para disminuir su número de candidaturas, dado que la candidatura presidencial provenía de nuestras filas. Con responsabilidad política, el Partido redujo su presencia inicial, resguardando los principales espacios de electividad ya definidos por el Comité Central y manteniendo candidaturas que aseguraran visibilidad nacional.

Asimismo, listas de izquierda que respaldaron mayoritariamente la candidatura presidencial — como el Partido Popular, Igualdad y Solidaridad— compitieron por fuera de la lista Unidad por Chile en algunos distritos, lo que fragmentó el voto progresista. A ello se sumó la exclusión del compañero Daniel Jadue de la competencia parlamentaria mediante una acción judicial impulsada por la derecha y poderes fácticos, hecho ampliamente repudiado.

Finalmente, la lista del Partido quedó conformada por 22 candidaturas a diputados en 16 distritos y 5 candidaturas senatoriales. Orgánicamente, se conformó una dirección nacional de campaña encabezada por la presidencia del Partido, que articuló una estrategia centrada en la vinculación entre la campaña presidencial y parlamentaria, el levantamiento de demandas sociales, la conducción regional de la campaña, una identidad clara del PC, el fortalecimiento comunicacional y el apoyo con análisis electoral y recursos limitados.

El resultado fue políticamente relevante: se cumplió el objetivo de mantener la bancada en la Cámara de Diputados, eligiendo 11 parlamentarios —6 reelectos y 5 nuevos— y se aumentó la representación en el Senado con la elección de una senadora. En la actual correlación de fuerzas, este resultado es clave para la defensa de derechos, la construcción de unidad y el fortalecimiento del Partido.

En términos territoriales, los resultados muestran una combinación de consolidación en bastiones históricos, avances en distritos altamente competitivos y retrocesos significativos en

zonas donde la fragmentación del voto progresista y el avance ultraconservador fueron determinantes.

En el norte del país se enfrentó un escenario adverso, perdiendo electividad en Arica, Tarapacá y Antofagasta, así como en Atacama. En estas regiones se hace imprescindible una discusión política y orgánica de fondo para reconstruir influencia territorial.

En contraste, la zona central mostró resultados positivos. En Coquimbo se mantuvieron dos diputaciones; en Valparaíso se consolidó la presencia del Partido con elecciones en los distritos 6 y 7, y con el triunfo senatorial de la compañera Karol Cariola como primera mayoría nacional. En la Región Metropolitana se obtuvieron resultados contundentes en varios distritos, con votaciones históricas y reelecciones significativas, aunque también con pérdidas que deben ser analizadas en detalle, particularmente en distritos donde existían condiciones para doblar.

En las tres regiones continuas Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana tenemos representación parlamentaria en todos excepto en el D-11 barrio alto.

En la zona sur, el Partido no logró representación parlamentaria, perdiendo un escaño en el distrito 20 y sin lograr elecciones en otros territorios, lo que obliga a una evaluación política y orgánica profunda frente al avance del PDG y los republicanos.

En el plano senatorial, si bien no se lograron todas las elecciones, candidaturas como las del Maule y La Araucanía obtuvieron votaciones significativas que contribuyeron a frenar el avance de la derecha, evidencian potencial político y permitieron la elección de un representante más del sector.

En otros aspectos, se valora la instalación de propuestas programáticas relevantes —seguridad, salarios, salud, puertos, no a los abusos— que sirven de base para el trabajo legislativo y la articulación con el movimiento social. La franja electoral parlamentaria y el trabajo comunicacional tuvieron una evaluación positiva, aunque se hace necesario fortalecer permanentemente esta área con mayores recursos.

El ámbito financiero fue una de las mayores dificultades de la campaña, debido a menores ingresos del SERVEL, retrasos en créditos bancarios y arrastres financieros previos, lo que afectó el despliegue. Esto refuerza la necesidad de fortalecer estructuralmente el área de finanzas del Partido.

De la evaluación general deben desprenderse decisiones claras: fortalecer el trabajo político de la bancada, mejorar la articulación entre parlamento, territorios y Partido, elevar la calidad del funcionamiento de las bancadas y su relación con la dirección del Partido, resolver pendientes orgánicos dejados por la campaña y profundizar el trabajo de masas, especialmente en el mundo sindical.

Resultados de las elecciones presidenciales

La segunda vuelta presidencial de 2025 se realizó bajo inscripción automática y voto obligatorio, alcanzando una participación superior al 80% del padrón, la más alta desde el retorno a la democracia. Este marco amplió significativamente el universo electoral y modificó los patrones tradicionales de participación y comportamiento de los votantes.

Jeannette Jara obtuvo 5.218.444 votos, equivalentes al 42,0% del total nacional, constituyendo la mayor votación histórica alcanzada por una militante comunista, representando a una amplia coalición de partidos de la izquierda y centro izquierda, “Unidad por Chile”. Territorialmente, la candidatura alcanzó mayoría solo en 36 comunas, concentradas principalmente en la Región Metropolitana, el norte del país, zonas extractivas, territorios insulares y comunas con rezago socioeconómico histórico.

ANALISIS CAMPAÑA PRESIDENCIAL

Un elemento que fue hábilmente usado por las candidaturas de la derecha es la pertenencia al gobierno de Jeannette como ex ministra, al hablar de la candidata de “continuidad”. En las franjas de todos los candidatos de derecha se asoció al Gobierno y sus déficits con nuestra candidata: “Boric es Jara, Jara es Boric”, frases que se difundieron como slogan de campaña y que lograron canalizar las críticas que la ciudadanía tenía contra el Gobierno, convirtiendo la elección presidencial en un seudo plebiscito contra la actual administración. A eso se suma el bajo apoyo que exhibía la administración Boric en las encuestas, con márgenes que se mantenían, en promedio, alrededor del 30%. Para ganar la elección era imprescindible disputar el voto de estos votantes que querían cambios.

Los candidatos de derecha, así como MEO y Parisi, se referían a Jeannette como la candidata de la continuidad, apropiándose ellos de la idea del cambio. En los datos de encuestas que se realizaron por el propio comando, los principales motivos para no votar por Jeannette Jara eran: Ser la candidata de continuidad del gobierno, con un 57% y su militancia comunista, con un 54%.

Pese a todos los esfuerzos, no logramos revertir esta percepción. En ello tampoco contribuyó que fuese el Gobierno quien se atribuyera la tarea de emplazar y cuestionar las propuestas del candidato de derecha mejor aspectado, lo que se tradujo en una confrontación del candidato con el presidente y el gobierno, evitando así debatir de manera más directa con nuestra candidata y fortaleciendo el relato de la candidatura de continuidad.

Otro elemento imposible de soslayar fue la disputa permanente de la estrategia electoral. En la primaria logramos contar con una estrategia de campaña que fue asumida e implementada, que tuvo como principal elemento apostar por un programa claro de transformaciones sociales, apostar por crecer en jóvenes, mujeres y sectores de bajos recursos, diferenciarse del gobierno en la profundidad de los cambios.

En el marco de la primera vuelta, no se logró consolidar de manera nítida una estrategia de campaña por parte de la conducción del comando, lo que derivó en improvisaciones y un relato que no lograba tener la consistencia que demostramos en la primaria.

Desde la conformación del comando en agosto, los datos advertían un escenario adverso para una eventual segunda vuelta, lo que exigía una campaña audaz orientada a crecer desde la primera. Pese a contar con una base de votantes fidelizada que permitía asumir mayores riesgos, se optó por una estrategia defensiva y reactiva, sin un antagonismo claro, lo que debilitó el posicionamiento de la candidatura.

En consecuencia, la estrategia adoptada limitó la capacidad de ampliar la base electoral y dejó espacio a candidaturas de derecha y anti-política, tal como lo reflejaron los resultados de ambas vueltas.

Los déficits en el relato comunicacional reflejaban de manera nítida esta tensión. La campaña comenzó a perder sello, identidad y consistencia, llevando incluso a disminuir la adhesión a nuestra candidatura. Pasamos de una primaria que había vuelto a revivir la esperanza de disputar la elección presidencial, a una campaña de primera vuelta que no logró mantener esta esperanza viva y que incluso, puso bajo sospecha el atributo de credibilidad que nuestra candidatura había logrado consolidar.

El despliegue territorial por regiones extremadamente desgastante para la candidata, le restó visibilidad pública en la primera etapa de la campaña de primera vuelta. Un esfuerzo por encontrarse con los territorios, altamente desgastante y sin un efecto concreto en mayor adhesión electoral.

La estrategia que se asumió de no confrontar a las candidaturas de derecha y especialmente al candidato que pasaría a segunda vuelta, apostando por un tono más conciliador y constructor de acuerdos, como los logrados para sacar adelante las 40 horas o la reforma previsional, terminó transformándose en una camisa de fuerza. Hacer el giro en el marco de la segunda vuelta, nos permitió develar las propuestas regresivas que tenía el candidato de derecha obligándolo a tener que asumir públicamente que no habrá retrocesos, pero tuvo como costo y riesgo, relativizar la credibilidad de nuestra candidata, lo que fue altamente explotado por la derecha.

Contar con un comando donde gran parte de sus integrantes no tenían experiencia en campañas presidenciales, no permitió que se tomasen decisiones rápidas y efectivas para corregir los déficits ni actuar con celeridad en una estrategia para llegar a los nuevos votantes, votante obligado o indeciso, lo que impidió que llegásemos con nuestro mensaje y contrarrestar la campaña de ser la candidatura oficialista, transformándonos en una real opción para ellos.

Mientras la derecha instaló la necesidad de un “Gobierno de emergencia”, nosotros no logramos representar la posibilidad de cambio, quedamos con la narrativa de los atributos de la candidata, lo que no logró ser suficiente para la disputa de este votante.

El rol de los Partidos y la relación de los partidos con el comando. En nuestro caso, asumimos con absoluta conciencia la presión por ser el Partido de la candidata, lo que no disminuyó en absoluto nuestro despliegue, sin embargo, no podemos abstraernos de las declaraciones públicas del comando que cuestionaban cada pronunciamiento de nuestro Partido, a lo que se sumó la campaña digitada por medios de comunicación y la derecha de tensionar permanentemente a la candidata con el Partido, apostando a la desafección de la candidata con el partido y viceversa.

Además, la militancia comunista de la candidata constituyó un segundo techo electoral relevante. Las mediciones situaban ese límite entre el 44% y el 50%, reduciéndose drásticamente entre los indecisos, lo que hacía imprescindible disputar tempranamente a ese electorado. Sin embargo, la estrategia defensiva y el antagonismo tardío permitieron que la candidatura fuera definida por sus adversarios a partir de su pertenencia al PC, en lugar de construir una identidad propia, desaprovechando la posibilidad de resignificar esa militancia como un atributo político positivo.

Asimismo, el crecimiento en primera vuelta requería un programa audaz y comunicable, centrado en el costo de la vida y el castigo a los abusos. Aunque el ingreso vital se mantuvo como propuesta ancla, faltaron iniciativas contundentes en materia antiabuso capaces de interpelar al electorado antipolítico. Los estudios indican que la clave estaba en posicionar a la candidata con capacidad de gestión en políticas públicas y antiabusos, comprometida con el uso del Estado para proteger a las mayorías frente a las élites, una línea que no logró consolidarse durante la campaña.

Como Partido, si bien somos absolutamente conscientes de que fuimos un soporte principal de la candidatura presidencial y reconocemos con orgullo el compromiso y la tarea realizada, también debemos ser claros en identificar el rol de cada uno en esta tarea histórica, partiendo por los miembros de este comité central.

El rol de la conducción del comando, que no logró consolidar nuestra proyección electoral tras la primaria y la tarea política principal, que era no solo pasar a la segunda vuelta, sino impedir que la ultraderecha llegase al gobierno, fue otro problema más.

Otro factor relevante fue la estrategia comunicacional. Mientras la derecha aprendió de las estrategias digitales de sus aliados en el mundo, nosotros tuvimos una estrategia digital que no logró ser suficientemente efectiva para captar nuevos votantes. Una lección clara de este proceso es que no podemos asumir desafíos de esta envergadura sin tomarnos en serio el uso de las redes sociales y el aprendizaje de su uso en campañas electorales, para captar nuevos votantes.

A estos factores, podemos sumar como parte del debate, otros tales como: Lo programático, representado en el giro que dimos en las propuestas de la primaria a la primera vuelta; la incapacidad que tuvimos de concretar la relación con los movimientos sociales y especialmente el sindical, apostamos a una candidatura amplia, social y política, no obstante, ello no se reflejó pese al trabajo que desplegaron los dirigentes sindicales en sus asambleas y encuentros, llamando a votar por nuestra candidata; así como el despliegue desigual de las fuerzas políticas, que será un factor a analizar pero no seremos nosotros los llamados a hacer su reflexión, entre otros elementos que puedan surgir de este debate colectivo.

En esto, tampoco podemos obviar el rol de nuestros propios compañeros y compañeras, destinados al trabajo de campaña presidencial. Si bien, se buscó incidir en los espacios de resolución del comando, fue complejo concretarlo dado el permanente cuestionamiento sobre la “excesiva” presencia del PC en la campaña, el carácter ciudadano de la campaña, que terminó desdibujando el rol de los partidos, así como la propia autonomía que se le entregó a nuestra candidata, a lo que se suma el excesivo celo de los equipos de apoyo en el control de la agenda y actividades en las que se debía o no participar.

En un escenario como éste, los ajustes realizados para la segunda vuelta, si bien permitieron detener la caída de nuestra intención de voto, ya proyectaba Kast la sensación de una candidatura consolidada y triunfante. No obstante, es necesario destacar que la llegada de nuevos equipos, roles más activos de nuestros compañeros y el rol de Paulina Vodanovic, presidenta del PS, como jefa de campaña, fueron importantes y significativos para permitir que nuestra candidata, lograse obtener más de 5 millones de votos y un 42% de la votación.

La segunda vuelta estuvo marcada por la dificultad de recuperar el tiempo perdido durante la primera. El retraso en el cambio de conducción del comando redujo significativamente el margen de acción, obligando a concentrar en pocas semanas la instalación de un antagonismo que no se había construido previamente. Esto tensionó la narrativa de la campaña y forzó a la candidata a un giro confrontacional acelerado.

Asimismo, uno de los desafíos clave fue disputar el electorado que en primera vuelta apoyó a Franco Parisi, un segmento despolitizado, pragmático y sensible a una agenda de bolsillo y antiabusos. Aunque este perfil fue identificado con mayor claridad en segunda vuelta, la agenda y el despliegue de la candidatura no siempre lograron alinearse de manera consistente con las expectativas de ese electorado, limitando su capacidad de expansión.

No pretendemos con esto relativizar el triunfo obtenido por el candidato de ultraderecha que logró más de dos millones de votos que nosotros y 16 puntos de diferencia porcentual. No estamos hablando hoy del mismo candidato que se presentó en su primera elección el 2017. Se trató de un candidato que no quiso hablar de sus propuestas ni defendió su programa, ni menos transparentar los valores que sostienen su rechazo a políticas públicas como el aborto, por ejemplo.

Junto con ello, resulta de alta relevancia para nuestros análisis, conocer e identificar en el debate con los compañeros y compañeras, qué fue aquello que marcó la diferencia en las 36 comunas donde ganó nuestra candidata. De ese análisis pueden surgir aprendizajes relevantes para el trabajo a desarrollar, donde el desafío principal sigue siendo impedir que el triunfo electoral de la ultraderecha consolide sus propuestas regresivas y se consagre como un proyecto de largo aliento.

La tarea de ser oposición a la ultraderecha

Es necesaria una caracterización integral del futuro gobierno de Kast que incorpore, además, una evaluación crítica de su programa y de los efectos previsibles que este podría generar en el país en los planos económico, social, político e institucional.

En el plano internacional y regional, el alineamiento activo del nuevo gobierno con los bloques de derecha y ultraderecha —particularmente con Estados Unidos bajo la conducción de Trump, con gobiernos europeos conservadores y con Israel— no es solo una definición diplomática, sino una orientación estratégica que condiciona su programa interno. Este alineamiento refuerza una lógica de subordinación a agendas geopolíticas externas, especialmente en materia comercial, de seguridad y de recursos naturales, lo que podría traducirse en mayor apertura a sanciones, aranceles y mecanismos de presión internacional que afectan la soberanía económica y la capacidad del país para definir políticas propias de desarrollo.

Desde el punto de vista económico, el programa de Kast profundiza un modelo de acumulación rentista y extractivista que ha mostrado límites estructurales. La insistencia en reducir el rol del Estado, ampliar privatizaciones y debilitar la regulación pública apunta a una posible recesión económica para el país, por el efecto de la disminución en US\$6.000 millones del gasto público.

La anunciada reducción de funciones burocráticas del Estado y el recorte del empleo público, presentada como una medida de “eficiencia”, tiene implicancias sociales y políticas significativas. No solo afecta directamente a miles de trabajadoras y trabajadores del sector público, sino que impacta en la calidad y continuidad de servicios esenciales como salud, educación, vivienda, seguridad y políticas sociales. En un Estado que ya opera bajo una lógica subsidiaria, esta contracción puede traducirse en vacíos de gestión, sobrecarga de municipios y debilitamiento de capacidades técnicas clave, generando conflictos laborales tempranos y deterioro de la legitimidad institucional.

En el ámbito social, el programa del gobierno combina una reducción del gasto social con un énfasis en el control del orden público. Esta combinación tiende a desplazar el abordaje estructural de los problemas sociales —desigualdad, endeudamiento, precariedad laboral, acceso a derechos— hacia respuestas centradas en la seguridad y el castigo. El riesgo es avanzar hacia una gestión del conflicto social basada en la contención represiva antes que en la resolución de las causas que lo originan, lo que históricamente ha demostrado ser ineficaz y generador de mayor tensión social.

En materia de control social y autoritarismo, existen señales preocupantes. El fortalecimiento del rol coercitivo del Estado, junto con un discurso que relativiza estándares de derechos humanos, abre la posibilidad de un uso más intensivo de facultades policiales y militares en contextos de protesta social, conflicto territorial o crisis migratoria. La idea de que las Fuerzas Armadas y de orden serían aliados incondicionales del proyecto gubernamental expresa una concepción instrumental de estas instituciones, que puede tensionar el equilibrio democrático y la subordinación del poder militar al poder civil, especialmente si se normaliza su intervención en tareas de seguridad interna.

El programa también presenta definiciones regresivas en materias de derechos humanos, medioambiente y pueblos originarios. En el caso del pueblo mapuche, el énfasis en soluciones de fuerza por sobre el diálogo político y el reconocimiento de derechos colectivos puede profundizar un conflicto histórico, con altos costos sociales y territoriales. En lo medioambiental, la subordinación de la regulación ambiental a la lógica del crecimiento económico inmediato amenaza con intensificar conflictos socioambientales, afectar comunidades locales y comprometer recursos estratégicos a largo plazo.

Un elemento que no es descartable es el avance de procesos de corrupción dentro del poder ejecutivo, dada la historia reciente de casos de corrupción concentrados principalmente en los actores políticos y económicos de la derecha, que hoy entran con una coordinación aún mayor al gobierno.

Una hipótesis que adquiere fuerza es que el gobierno podría transitar por fases diferenciadas: una primera etapa de gestión concentrada en temas considerados “urgentes” por la ciudadanía, y una segunda fase de ofensiva cultural e institucional más profunda, orientada a reconfigurar valores, normas y equilibrios democráticos. En ese escenario, el despliegue territorial y comunicacional del gobierno de Kast, sumado a su capacidad de instalar marcos de sentido en torno a seguridad, orden y autoridad, puede tensionar aún más el espacio democrático y el ejercicio de derechos.

Frente a este cuadro, resulta estratégico fortalecer la observación, el análisis y la capacidad de respuesta política y social. En particular, será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria, como un 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras, que exprese no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas. La experiencia acumulada en los últimos años en organización territorial y trabajo de masas debe ser evaluada críticamente y proyectada con mayor articulación, continuidad y capacidad de incidencia, ante un escenario que combina ajuste económico, control social y disputa cultural de largo aliento.

Conclusiones

En primer lugar, el proceso electoral de 2025 confirma que Chile atraviesa un momento histórico de alta complejidad, marcado por la convergencia de una crisis estructural del modelo neoliberal, un ciclo prolongado de desafección política y el avance de proyectos de

ultraderecha que logran capitalizar el malestar social. La derrota presidencial no puede ser leída como un hecho aislado ni exclusivamente atribuible a factores de campaña, sino como la expresión de un ciclo político más amplio, en el que confluyen transformaciones internacionales, cambios en el comportamiento electoral producto del voto obligatorio y una disputa profunda por el sentido de la democracia, el rol del Estado y la relación entre política y pueblo. Comprender este escenario es una condición indispensable para evitar diagnósticos simplistas y para proyectar una estrategia política acorde a la magnitud del desafío.

En segundo lugar, es una necesidad desarrollar un intenso trabajo unitario, proyectando la articulación de los partidos y movimientos que participaron de las elecciones recientes, tanto aquellas que se coordinaron bajo “Unidad por Chile”, como aquellas que yendo por fuera entregaron su apoyo a la candidatura única en segunda vuelta

Finalmente, el desafío central del período no es únicamente resistir un gobierno de ultraderecha, sino disputar su proyección histórica. Ello exige una política de largo aliento orientada a la reconstrucción del tejido social, al fortalecimiento del trabajo de masas y a la construcción de una unidad social y política amplia, sin exclusiones a priori. El Partido está llamado a jugar un rol estratégico en esta etapa: convertir el acumulado electoral, territorial y político en fuerza social organizada, capaz de disputar y abrir nuevamente un horizonte democrático y de transformación para Chile.

Santiago, 20 de diciembre de 2025



**COMITÉ CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE**